



En Valencia, el 24 de enero de 2019, se ha celebrado el **III Comité Nacional Ordinario de la Unión General de Trabajadores del País Valencià**, del que emana la siguiente

## **DECLARACIÓN**

### **Contexto político, económico y social.-**

El año 2018, aunque con excepciones tan relevantes como México, ha venido a concretar en las urnas de un buen número de países la frustración, el miedo y la falta de esperanzas provocadas por la Gran Recesión y por la globalización mediante el apoyo a formaciones políticas de ultraderecha. Así, desde Brasil a Hungría o Italia, el rebrote del nacionalismo excluyente, xenófobo, proteccionista en lo económico y contrario a la igualdad fundamental de todas y todos los seres humanos se abre paso ante la perplejidad de una Europa que dice seguir defendiendo los valores de la Ilustración presentes en su carta de derechos fundamentales, pero que ha practicado frente a la crisis medidas insolidarias, de confrontación entre sus Estados miembros, de austeridad mal entendida y todo ello sin la participación de sus ciudadanas y ciudadanos, que observan las Instituciones de la Unión Europea como un entramado burocrático ajeno a sus intereses y defensor de estabildades macroeconómicas que se supeditan a sus necesidades y urgencias.

La política económica neoliberal de desregulación financiera, pero también laboral, está en el origen de burbujas que al estallar nos sumieron en una recesión sin precedentes desde 1929. Y la respuesta dada a esa crisis en Europa ha supuesto la puesta en cuestión del Estado social con recortes en sanidad, educación, pensiones y servicios sociales. Este es el triste panorama que nos han dejado los ideólogos y practicantes de una derecha política que curiosamente siguen vendiendo con éxito su supuesta mayor capacidad para gestionar con acierto la economía.

La reacción debiera ser la de entender que en un mundo globalizado en lo económico se hace imprescindible la aparición de actores políticos cada vez más globales. Los Estados nación europeos carecen, por sí solos, de capacidad para hacer frente a los grandes inversores, grandes flujos del capital y grandes actores globales como EEUU o China, y por ello avanzar en la cesión de soberanía y en la consiguiente creación de una Unión Europea federal es la única alternativa para recuperar la seguridad, la igualdad de oportunidades, la justicia social, la protección ante el infortunio y la paz. Desgraciadamente, la reacción está siendo muy distinta: una mayoría de británicas y británicos (exigua, pero mayoría) apostaron por el Brexit, una minoría de la ciudadanía catalana (minoría, pero mayoritaria) apostaron por la declaración unilateral de

independencia y, en buena parte de la Unión Europea, surgen Gobiernos y fuerzas políticas que defienden menos Europa, sumándose al discurso proteccionista y supremacista cuyo epítome es el Presidente Trump.

Las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019 serán determinantes, podemos salvar el vacío o caer en el abismo. Por eso son tan importantes estas elecciones para la UGT-PV y por eso apoyamos decididamente a aquellas opciones políticas que defienden una Europa más unida, más democrática y más solidaria.

En España el hecho político más relevante ha sido la moción de censura presentada por el PSOE con éxito y la consiguiente sustitución en la Presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy por Pedro Sánchez, pero no es menos importante el resultado electoral en las autonómicas andaluzas en donde ha irrumpido con fuerza la ultraderecha, y las derechas con su apoyo gobernarán por primera vez después de 36 años ininterrumpidos de gobiernos del Partido Socialista. Mientras tanto, el conflicto en Cataluña sigue larvado y condicionando tanto la política nacional como la autonómica en un escenario de inestabilidad y próxima confrontación electoral en mayo de 2019.

Desde la Unión General de Trabajadores del País Valenciano saludamos el cambio en la Moncloa porque esperamos de él políticas económicas, sociales y laborales distintas. Un presupuesto que aumente el gasto en protección social, que restituya los recortes en sanidad, educación o dependencia, que invierta en infraestructuras e innovación apoyando un cambio de modelo productivo imprescindible para retener la juventud y el talento que sale de nuestros institutos y universidades, una corrección profunda de la reforma laboral del P.P. que devuelva a las organizaciones sindicales una mayor capacidad de intervención en la negociación colectiva para superar las insoportables tasas de desigualdad generadas por la crisis y por la respuesta que a la misma se le ha dado desde la derecha. Pero también esperamos un aumento de los ingresos públicos mediante la lucha decidida contra el fraude fiscal y una reforma tributaria progresiva y justa que haga posible el gasto social y la política de inversiones sin poner en riesgo nuestros compromisos de déficit y deuda pública.

Somos conscientes de la minoría parlamentaria del partido en el Gobierno, de las dificultades para sacar adelante un presupuesto, de los condicionantes inasumibles que exigen algunas de las fuerzas políticas que apoyaron la moción de censura, pero corresponde al ejecutivo llevar al Congreso de los Diputados sus propuestas y sacarlas adelante o, en caso de no poder hacerlo, permitir a la ciudadanía conocer quiénes se oponen a la prioridad aplicativa del convenio sectorial sobre el de empresa, a la recuperación de la ultra-actividad en la negociación colectiva, a la equiparación de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de las subcontratas con los de la empresa

principal o al subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Porque no hay demasiada paciencia en una sociedad castigada por la crisis que ve crecer la riqueza y los beneficios empresariales sin que por ello mejore ni la calidad de su empleo ni sus retribuciones le permitan vivir con dignidad.

Si no en su totalidad, si en gran medida respaldamos los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno. Responden a la necesidad de incrementar los ingresos con una fiscalidad justa y progresiva para incrementar el gasto social y la inversión. Cumplen con el compromiso de aproximar las inversiones en la Comunitat Valenciana a nuestro peso poblacional y, lamentablemente, no pueden ser más expansivos porque la negativa de PP y C's a permitir que el déficit se elevase del 1,3 al 1,8 lo imposibilita y dificulta una mejora de la financiación autonómica.

CEOE ha sido capaz de firmar con UGT y Comisiones un Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva que resultó imposible en el 2017 y que entre otras cosas supone un avance en la mejora de los salarios y la fijación de un salario mínimo de convenio de 1000€ para el 2020, pero se opone al Salario Mínimo Interprofesional de 900€ o a la corrección de la reforma laboral que las organizaciones sindicales exigimos. Defienden con un alto grado de cinismo la autonomía de las partes para acordar, pidiendo con ello al Gobierno que se abstenga de legislar si no hay un consenso previo entre los agentes económicos y sociales, pero nada opusieron cuando el Gobierno de Rajoy impuso su reforma laboral saltándose el principio que ahora reclaman.

Se atribuye, sin dato alguno que lo corrobore, un supuesto "empleicidio" a la subida del S.M.I., pero no hay sector de actividad que aporte un mínimo valor añadido que no sea capaz de asumir esa subida ni empleo que merezca tal nombre si no lleva aparejada retribuciones tan modestas como 900€. Por otra parte, asistimos a una fase de ralentización de la economía en gran medida provocada por el proteccionismo estadounidense y sus guerras comerciales, pero que es aprovechada en nuestro país por la derecha para trasladar la idea de que ello obedece a las políticas del actual Gobierno, cuando lo cierto es que seguimos creciendo a tasas próximas al 3% y los datos de empleo siguen mejorando. Por ello desde UGT y Comisiones vamos a llamar a las trabajadoras y los trabajadores a la movilización el próximo 8 de febrero, apoyando y exigiendo al Gobierno de España para que pueda cumplir y cumpla sus compromisos en materia de justicia social e igualdad.

En Andalucía se ha producido un cambio no previsto ni por las encuestas ni por los analistas que pone en evidencia hasta qué punto el miedo, la desesperanza y la frustración pueden llevar a la democracia al borde del abismo. Nada hay que objetar a las decisiones manifestadas por las y los andaluces en las urnas, pero sí a la

interpretación que de estas hacen determinados partidos políticos. No es verdad que una mayoría de andaluces y andaluzas esté contra la igualdad entre hombres y mujeres o que no entienda y quiera corregir la insufrible violencia machista, no es verdad que una mayoría de andaluces y andaluzas esté contra el Estado de las Autonomías y pretenda ceder competencias a Madrid, ni es verdad que una mayoría de andaluces y andaluzas se identifique con el racismo y la xenofobia; sin embargo, esta es la pátina fascista que impregna el contenido de lo acordado por el PP y Vox con el beneplácito disimulado de Ciudadanos. Constatar que no sea una mayoría de andaluzas y andaluces quienes defienden estas ideas no basta para conformarnos, la irrupción de Vox es un síntoma de ese miedo, esa desesperanza y esa frustración; pero la alternativa no es sumarse a su discurso para alcanzar el poder a cualquier precio, sino explicar, defender y practicar las ideas propias ofreciendo soluciones a los problemas.

En Cataluña tenemos también un escenario racista y xenófobo detrás de las proclamas independentistas. Es de difícil solución un problema que tiene mil aristas, pero que sobre todo retroalimenta discursos extremos, dentro y fuera de Cataluña, con el consiguiente caudal de votos en una y otra dirección. UGT-PV defiende la necesidad de distensión que supone la apertura al diálogo abierta por el Gobierno con el Govern, así como su determinación de cumplir y hacer cumplir el marco constitucional. A nuestro parecer todo lo demás es propaganda que pretende enmarañar un escenario ya de por sí complejo para sacar partido.

En la Comunidad Valenciana hemos disfrutado de un marco político de estabilidad, después de 20 años de gobiernos de derecha con innumerables imputados, condenados y varios dirigentes del más alto nivel en prisión. Las organizaciones sindicales hemos recuperado un papel de interlocutores en el diálogo social con el Govern que nos ha permitido influir en la elaboración de leyes de enorme trascendencia para la vida de las trabajadoras y trabajadores: desde la violencia de género con sus ramificaciones en el mundo del trabajo hasta la ley de responsabilidad social en la que lo determinante para la adjudicación de contratos con la administración ya no será el precio y en donde la subrogación y la aplicación del convenio sectorial (o el de empresa, si este fuese más beneficioso) son elementos que mejorarán la calidad del empleo y las retribuciones a miles de personas trabajadoras, son algunos ejemplos de ese diálogo social en el que hemos participado.

Hemos defendido, y seguimos haciéndolo, la necesaria reforma del sistema de financiación autonómica. La Comunidad Valenciana padece una infrafinanciación y una infrainversión del Estado que lastra nuestras posibilidades de prestar servicios fundamentales y de crecer en la dirección del cambio de modelo productivo que

demandamos. Que al frente del Gobierno de España esté un Presidente del PSOE no significa, en ningún caso, que las demandas referidas, por justas, dejen de estar en nuestra agenda. Somos conscientes de las dificultades de sacar una reforma de la financiación por la falta de apoyos parlamentarios, pero sería deseable alguna propuesta que situará el escenario para una negociación futura en la que nuestras demandas como valencianos y valencianas fueran atendidas. Aunque, como queda dicho, nos felicitamos por la mejora en las inversiones que los actuales Presupuestos contemplan.

La Comunidad Valenciana es observada como un experimento de éxito en el que distintas fuerzas de izquierdas han sido capaces de ponerse de acuerdo para gobernar. Frente a los augurios, nada positivos, el crecimiento del PIB ha sido superior a la media y la reducción del desempleo también. Todos los datos económicos demuestran que en nuestra Comunidad las cosas han ido mejor que en la mayoría de Comunidades Autónomas y eso a pesar de la enorme deuda pública y la escasez de recursos. Se ha puesto en marcha la renta básica de inclusión, se recuperó la sanidad universal, se facilitó el acceso a la vacuna contra la hepatitis C a cuantas valencianas y valencianos la necesitasen, se estableció la gratuidad de los libros de texto y se han acometido gran número de medidas legislativas de protección a las y los más débiles.

La Comunidad Valenciana es hoy una autonomía con buena reputación entre quienes defienden medidas de justicia social, libertades civiles y protección pública, pero nada asegura que quede al margen de las turbulencias que salpican el panorama Estatal de confrontación entre posiciones que se extreman intentando obtener réditos entre el descontento, la frustración o las tensiones nacionalistas, aún a costa de la propia calidad de la democracia que, entre otras cosas, se caracteriza por el respeto a los derechos de las minorías. Para conjurar estos riesgos se hace más necesario que nunca un discurso de unidad entre las fuerzas que permitieron el cambio en la Comunitat porque revertir las políticas de desprotección, ahondar en la mejora de los servicios públicos y hacer posible un cambio de modelo productivo que nos vuelva a situar entre las autonomías con mayor renta es un empeño de medio y largo recorrido. La Unión General de Trabajadores en el País valenciano apuesta por ello y en tal sentido defiende aquellas políticas que van en la referida dirección.

### **Ley de Participación y Colaboración Institucional.-**

Desgraciadamente, el intento de minar la Ley de Participación y Colaboración Institucional en contra de las organizaciones sindicales mayoritarias no ha sido obra solo de la derecha, sino que ha encontrado el entusiasmo de fuerzas políticas

autoproclamadas del cambio que en un intento miope de trasladar al plano sindical la fragmentación política existente en el terreno de la izquierda han intentado debilitar al movimiento sindical de clase o han pretendido favorecer opciones sindicales minoritarias de corte nacionalista en un momento en el que la partida se juega a nivel mundial y en el que el sindicalismo internacional tiene más necesidades de unidad que nunca. De momento, ese intento ha quedado aparcado, pero no así las amenazas, por lo que conviene mantener alta la guardia y buscar acuerdos que nos garanticen la mayor estabilidad e independencia mediante un discurso que ponga en valor el trabajo que realizamos en el marco de la autonomía sindical y la negociación colectiva.

### **El 8 de marzo de 2018.-**

El pasado 8 de marzo supuso la mayor movilización de la sociedad en favor de la igualdad entre mujeres y hombres, así como el inapelable rechazo a la violencia machista y a la búsqueda de soluciones a una lacra, la de la citada violencia, que supone el asesinato de mujeres por el mero hecho de serlo. UGT y Comisiones convocamos paros de dos horas esa jornada porque entendimos que el machismo es un problema de todos y todas y tiene su presencia en el mundo del trabajo a través de la brecha salarial o el acoso sexual y por razón de sexo. Lo verdaderamente importante no es discutir sobre la duración de los paros, sino hacer visible y presente un problema de enorme gravedad que atenta a un principio básico como la igualdad con resultados dramáticos. Sumarse al discurso populista de quién puede más va contra la transcendencia de un derecho fundamental como lo es la huelga y, en especial, la huelga general. La UGT, en 1888 y en el art.2 de sus estatutos, ya proclamaba “la igualdad de salarios para los obreros de uno y otro sexo” por lo que nadie puede con un mínimo de rigor acusarnos de apuntarnos a la ola del feminismo.

En este año que comienza, lejos de confirmarse el augurio de algunas personas que proclamaban que la lucha por la igualdad no tenía vuelta atrás, observamos con preocupación el programa electoral de algunos partidos y de gobierno en Andalucía, que enarbola el machismo como bandera. Por ello, este 8 de marzo debe ser de nuevo un día para la reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres, la lucha contra la violencia de género y la defensa de la dignidad, la libertad individual y los derechos civiles. Debe hacerse desde la unidad y no desde el oportunismo de señalar, entre más o menos feministas. Queda dicho que a la UGT nadie puede negarle su historia ni su presente por la defensa de la igualdad sin distinción de sexos.

## **Salud laboral.-**

Se está dando un cambio de tendencia en las cifras sobre siniestralidad laboral desde el año 2013 del todo inadmisibles, que sigue en constante incremento coincidiendo con la aplicación de la Reforma Laboral y la mejora de la economía. En estos cinco años, el índice de incidencia en accidentes mortales se ha incrementado en casi un 52%, la precariedad y el deterioro de las condiciones de trabajo, instaladas en los distintos sectores de actividad, explican las circunstancias en que estos se producen.

Desde UGT-PV seguimos denunciando que las enfermedades como el cáncer de origen laboral causadas por determinados agentes químicos y las derivadas de riesgos psicosociales como el acoso laboral, el acoso sexual o por razón de sexo y la violencia de género, que siguen quedando fuera de las estadísticas y, por tanto, dificultando su prevención.

Para revertir esta situación son necesarias múltiples actuaciones: la derogación de la reforma laboral, el cumplimiento de la normativa sobre prevención por parte de las empresas, seguir avanzando en la puesta en marcha de los compromisos adquiridos por el Gobierno valenciano en el marco del diálogo social y en la estrategia valenciana de seguridad, salud y bienestar laboral 2017-2020, estableciendo las prioridades anuales en las políticas de prevención de riesgos laborales para la Comunitat Valenciana.

Desde UGT-PV seguimos reivindicando y negociando unas condiciones de trabajo seguras para las personas trabajadoras de empresas y administraciones públicas, así como reconociendo el papel fundamental de los delegados y delegadas de prevención. En este sentido, hemos propuesto a la patronal la necesidad de alcanzar un acuerdo que profundice en la tarea de asesoramiento y vigilancia de la salud laboral en la microempresa, mediante la creación de delegados y delegadas de prevención de ámbito territorial con el apoyo de la administración.